

¿Giro a la izquierda en Perú?

Axel Anlauf

análisis
y debate

¿Giro a la izquierda en Perú?

Axel Anlauf¹

21 de junio de 2021

El recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se asemejó a un *thriller* que se prolongó durante días: al final, el candidato de izquierdas Pedro Castillo (50,13 %) se impuso a la populista de derechas Keiko Fujimori (49,87 %), por un margen de solo 44 000 votos. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha confirmado el resultado, ya que la candidata perdedora habla de fraude e impugnó miles de actas electorales.

Keiko Fujimori es la hija y heredera política del expresidente autoritario Alberto Fujimori (1990-2000), quien destituyó al Parlamento y al Poder Judicial, controló los medios de comunicación y reprimió brutalmente a los miembros de la oposición que no pudo comprar. Dado que el partido de Castillo se

considera leninista, la campaña electoral se llevó a cabo, en gran medida, de forma llamativa y emocional, según la lógica del menor de los males: fujimorismo vs. comunismo.

Para entender esta elección histórica, y las perspectivas para los próximos meses, es necesario mirar detrás de esta fachada, especialmente la amplia crisis social en la que se encuentra Perú. En el fondo, los efectos de la pandemia del coronavirus han exacerbado la desigualdad social preexistente y han acelerado la desintegración de un sistema político plagado de corrupción.

Las estrategias contra esta crisis que se han presentado en el curso de las elecciones difieren diametralmente. Castillo confía en una “refundación” política desde abajo,

Foto de portada: Anthony Niño de Guzmán.

¹ Axel Anlauf es becario de doctorado de la Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) y está escribiendo su tesis sociológica sobre la minería de fosfatos en Perú, en la Universidad de Jena.

mediante una asamblea constituyente. Pretende apartarse del modelo económico neoliberal, orientado a la exportación, hacia una mayor creación de valor nacional y una redistribución institucionalizada. La respuesta de Keiko Fujimori al sistema político deslegitimado es un gobierno autoritario, con programas clientelistas para combatir la pobreza y asegurar la lealtad.

Ninguno de estos enfoques ha recibido una clara mayoría. Además, la disputa por los resultados electorales no solo se libra legalmente, sino también en las calles de Perú. Hay también llamamientos a la intervención militar. Esto significa que la inestabilidad política de los últimos tres años, en los que el país ha tenido cuatro presidentes, no llegará a su fin por el momento.

La desintegración del sistema de partidos

El sistema de partidos lleva desintegrándose, al menos, desde los años ochenta, cuando Perú se vio atrapado en la vorágine de la crisis de la deuda latinoamericana. Los partidos tradicionales, Acción Popular, de centroderecha, así como el APRA, de izquierda nacionalista, fracasaron estrepitosamente con sus contradictorios programas de gobierno. La inflación alcanzó los cuatro dígitos a finales de la década los ochenta, y millones de personas se sumieron en la pobreza extrema.

Al mismo tiempo, la organización guerrillera maoísta Sendero Luminoso se extendió. Con sus atentados terroristas, contribuyó significativamente a desestabilizar la economía, y el Estado respondió con una estrategia brutal

de contrainsurgencia. Así, a finales de la década de los ochenta, el país se encontró en una espiral de hiperinflación y violencia política. La malnutrición, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción eran omnipresentes. Los partidos de izquierda más pequeños tuvieron a veces un gran apoyo popular al organizar la autoayuda comunitaria y lograron un considerable peso político, como la alianza electoral Izquierda Unida. Sin embargo, pronto resultó cada vez más difícil formular y afirmar alternativas creíbles entre las políticas gubernamentales de “izquierda” (APRA) y el terror de “izquierda” (Sendero Luminoso).

La espiral de inflación y violencia marcó el contexto del ascenso de Alberto Fujimori. El futuro dictador no pertenecía a ningún partido tradicional ni tenía experiencia política, lo que lo convirtió en una alternativa atractiva para muchos votantes en las elecciones presidenciales de 1990, si se toma en cuenta lo enredada que estaba la clase política. Fujimori se presentó como un candidato tecnócrata que quería limpiar el viejo sistema político corrupto con trabajo honesto. De hecho, en abril de 1992, disolvió el Parlamento mediante un “autogolpe” y suspendió la Constitución para gobernar sin trabas, por decreto. Bajo presión internacional, se convocó una Asamblea Constituyente, en la que el partido de Fujimori tuvo mayoría y pudo institucionalizar su estilo de gobierno autoritario.

La reestructuración neoliberal de Fujimori

La Constitución de 1993 resultó un elemento central de la reestructuración neoliberal,

ya que asignó al Estado un papel subordinado en la economía y la sociedad, ofreció a los inversores una amplia protección legal y restringió los derechos de los trabajadores.

La reestructuración comenzó en las primeras semanas después de que Fujimori tomara posesión del mando. En consulta con la comunidad empresarial peruana y las instituciones financieras internacionales (especialmente el FMI), aplicó una terapia de choque que generó un descenso de la inflación. Sin embargo, al mismo tiempo, hundió a millones de personas en la miseria: en ocasiones, más de dos tercios de la población vivía por debajo del umbral oficial de pobreza. Fujimori se apoyó en la privatización de empresas, en una reforma fiscal regresiva, en el establecimiento de tipos de cambio flotantes y en una drástica reducción de los aranceles, que pasaron de una media del 66 % al 15 %. Al mismo tiempo, el Gobierno disolvió los bancos nacionales de desarrollo, que financiaban programas de crédito para las medianas empresas de los sectores industrial y agrícola. Con ello se abandonó definitivamente el objetivo de desarrollo nacional mediante la industrialización y el desarrollo del mercado interno, que se había perseguido desde la década de los sesenta. En su lugar, se pasó a explotar las “ventajas comparativas” en las exportaciones de productos básicos, lo que duplicó las exportaciones entre 1990 y 1997 e impulsó el crecimiento económico. Sin embargo, la tasa de pobreza seguía siendo extremadamente alta, superior al 50 %.

Los tecnócratas neoliberales formados en las universidades de élite desempeñaron un papel especial para establecer y consolidar este

modelo. Ocuparon puestos en los ministerios de Economía y Finanzas, pero también en el Banco Central, la autoridad de supervisión bancaria y la autoridad fiscal. Al estar dotadas de presupuesto propio, estas instituciones pudieron funcionar con independencia del presupuesto gubernamental y de la coyuntura política. De este modo, el neoliberalismo se institucionalizó firmemente.

Cuando se hicieron públicas la amplia corrupción y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos del régimen en el año 2000, el gobierno de Fujimori llegó a su fin de forma abrupta. Sin embargo, lo que no se hundió con él fue el modelo económico que creó.

Los gobiernos sucesores de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) continuaron las políticas de Fujimori, al facilitar que se otorgaran concesiones para extraer materias primas, y los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El aumento de los precios en los mercados internacionales de materias primas jugó a su favor e hizo de la exportación de materias primas una estrategia económica atractiva durante un tiempo.

El lado oscuro del *boom* de las materias primas

El aumento de los precios dio lugar a un verdadero *boom* de las materias primas: entre 2003 y 2013, las exportaciones mineras peruanas (medidas en dólares estadounidenses) se multiplicaron por diez, y el sector minero pasó a representar más del 50 % de las exportaciones. Este auge también generó que aumentara la inversión internacional en el desarrollo de nuevas minas, lo que hizo que

se duplicara el volumen de producción de los minerales más importantes: oro y cobre, pero también zinc, plomo, mineral de hierro y fosfato. Como resultado, la economía peruana creció entre un 5 y un 9 % anual entre 2004 y 2013, con la excepción del año de la crisis de 2009. La tasa de pobreza también se redujo significativamente, del 58,7 % (2004) al 23,9 % (2013).

Sin embargo, el sector minero también se ha convertido en objeto de fuertes disputas sociales. La cuestión principal son las consecuencias socioecológicas de la minería para los agricultores, en su mayoría indígenas o de pequeña escala, de las regiones mineras. Por un lado, se utilizan grandes extensiones de terreno para la explotación minera a cielo abierto y, por otro, el procesamiento de los minerales consume enormes cantidades de agua, que es escasa en el seco altiplano andino. Además, químicos como el cianuro envenenan el agua restante. Por ello, muchos habitantes de la zona luchan contra la minería. En 2013, el último año del auge de las materias primas, alrededor del 70 % de los conflictos sociales en el país estaban relacionados con la extracción de materias primas. Esta protesta se criminaliza a menudo y se enfrenta a la represión; en los últimos años, decenas de personas han muerto en conflictos por proyectos mineros.

Sin embargo, a estos costes sociales y ecológicos consecuentes hay que añadir la cuestión de cómo se distribuyen los ingresos procedentes de la exportación de materias primas. Al Gobierno le gusta anunciar las atractivas condiciones de inversión, especialmente el bajo nivel de impuestos. Hoy,

por ejemplo, las regalías solo rondan el 3 % y, adicionalmente, solo hay un “Impuesto Especial a la Minería” del 2 al 8 %. El impuesto de sociedades puede reducirse si las empresas mineras invierten en infraestructuras locales. Hasta 2005, las empresas podían incluso celebrar los llamados “contratos de estabilidad jurídica”, una figura jurídica de la época de Fujimori según la cual se exime del pago de regalías y se fija el nivel de impuestos por décadas, es decir, no puede ser modificado por los gobiernos posteriores.

Ante el creciente descontento con el modelo de exportación de materias primas, Ollanta Humala llegó al poder en 2011; prometió una distribución más justa de los ingresos mineros y aseguró que el agua era más importante que el oro. Sin embargo, Humala apenas contaba con el apoyo de las fuerzas sociales organizadas y finalmente optó por el oro en lugar del agua. No quedó mucho de la redistribución prometida, sobre todo porque el “pastel” se redujo drásticamente con la caída de los precios de las materias primas a partir de 2013. Su sucesor, el tecnócrata neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, se concentró en dismantelar las regulaciones en el sector medioambiental que tanto había costado conseguir, con el fin de hacer a Perú más atractivo para la inversión extranjera y compensar así la caída de los precios de las materias primas.

Aunque el auge de las materias primas ha reducido la pobreza en el país, alrededor de 6,5 millones de personas —o una quinta parte de la población— siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Incluso los que viven por encima de esta línea suelen

llevar una existencia precaria. Alrededor del 70 % de la población activa está empleada en el sector informal, es decir, se gana la vida con la venta ambulante, trabajos esporádicos, servicios menores, etc. Esto ilustra el carácter excluyente del crecimiento impulsado por las exportaciones: la minería puede generar altas tasas de crecimiento, pero apenas ofrece empleos formales y destruye los medios de vida en las zonas rurales.

Este desequilibrio socioeconómico, sumado a la continuidad neoliberal que hizo que los resultados electorales parecieran irrelevantes en algunos casos, contribuyó a una pérdida masiva de legitimidad de la clase política, incluso antes de los recientes escándalos de corrupción. Por ejemplo, según las encuestas del Latinobarómetro, ya en 2016 alrededor del 84 % de los peruanos estaban convencidos de que el país estaba gobernado por grupos poderosos que actuaban en su propio beneficio y no en el bien común. El promedio latinoamericano en 2016 fue de “solo” el 73,5 % de esta opinión. En Perú la confianza en las instituciones políticas es especialmente baja.

Cascada de crisis a partir de 2017

Esta pérdida de confianza fue alimentada a partir de 2017 por el escándalo de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, que le costó el cargo al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski tras menos de dos años de gobierno. Su empresa de inversiones había aceptado pagos irregulares de Odebrecht. Consiguió evitar un primer juicio político a finales de 2017 mediante una dudosa connivencia con los

diputados de la oposición. Cuando esto se hizo público, Kuczynski renunció en marzo de 2018. Además de él, otras figuras políticas de alto rango estuvieron implicadas en el asunto de la corrupción. El expresidente Alan García se pegó un tiro antes de ser detenido y el APRA, el partido más antiguo de Perú, desapareció de la escena política.

Keiko Fujimori perdió por poco las elecciones presidenciales de 2016 y, al mismo tiempo, ganó la mayoría en el Congreso con su partido Fuerza Popular. Aunque la propia Fujimori está profundamente implicada en la corrupción y ha estado en repetidas ocasiones en prisión preventiva, pudo utilizar esta mayoría parlamentaria para actuar contra el debilitado gobierno del sucesor de Kuczynski, Martín Vizcarra. La lucha por el poder entre el Gobierno y el Congreso, que duró meses, paralizó la vida política y solo terminó con nuevas elecciones parlamentarias en enero de 2020, en las que el partido de Fujimori perdió la mayoría parlamentaria.

Sin embargo, el gobierno de Vizcarra solo se benefició brevemente de la derrota de Fujimori, pues luego el país fue golpeado con toda la fuerza por la pandemia de coronavirus. Aunque Vizcarra declaró pronto el estado de emergencia y restringió la vida pública, el virus se extendió rápidamente. Las condiciones sociales específicas —como el suministro completamente inadecuado de agua potable y la dependencia de la mayoría de la población del trabajo diario en el sector informal— fueron los factores decisivos. Ya a mediados de junio de 2020, la pandemia en Perú alcanzó un pico temporal con, oficialmente, más de 300 muertes al

día; en la segunda ola, desde principios de 2021, esta cifra ya se ha superado en varias ocasiones. Perú es ahora el país con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en relación con el tamaño de la población en todo el mundo entre los países donde hay cifras confiables.²

Como la atención sanitaria pública es muy deficiente, la pandemia afecta principalmente a los hogares más pobres, que carecen de agua potable y de una vivienda adecuada, y no tienen acceso a equipos respiratorios. Estos hogares también se ven especialmente afectados por las consecuencias sociales. Debido al colapso económico tras la pandemia —el producto interior bruto de Perú cayó un 13 % en 2020—, cuatro millones de personas perdieron sus empleos, y la ayuda económica llegó casi exclusivamente a las grandes empresas. Para las personas del sector informal, las consecuencias son muy graves, porque una vez que ya no pueden ofrecer bienes o servicios en la calle, tampoco tienen ingresos. En ocasiones, más del 70 % de la población no podía acceder a alimentos suficientes. La tasa de pobreza aumentó del 20 al 30 %. La pandemia de Covid-19 ha vuelto a exacerbar de forma significativa las desigualdades que ya existían antes, alimentando así el resentimiento de grandes sectores de la población.

La oposición en el Congreso aprovechó el menguante apoyo del presidente Vizcarra para destituirlo. En el segundo intento, en noviembre de 2020, el derrocamiento tuvo éxito con un procedimiento muy cuestionable.

El nuevo presidente era Manuel Merino, de Acción Popular, que pretendía apoyarse en un gabinete de ultraderecha, respaldado por los militares. Sin embargo, ante las masivas protestas en todo el país, Merino se vio obligado a dimitir tras solo cinco días.

Así, la inestabilidad política y la pérdida de legitimidad de la clase política se han agravado.

Primera vuelta de las elecciones presidenciales

En este contexto, no fue una sorpresa que Pedro Castillo ganara la primera vuelta de las elecciones de abril, en contra de las valoraciones de los medios urbanos y de los expertos. Era un forastero que prometía el cambio y había liderado una exitosa huelga nacional de profesores. Este hombre de 51 años creció en circunstancias humildes en un pueblo andino, habla el idioma de la gente común y conoce sus problemas. Sus declaraciones conservadoras en materia de valores contra el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo se encontraron con la incompreensión, especialmente entre las generaciones más jóvenes de las zonas urbanas.

El resultado más claro de la primera ronda de votaciones fue la deslegitimación del sistema político en su conjunto. Casi la mitad del electorado no votó a ningún candidato, ya que se mantuvo alejado de las urnas, o presentó votos nulos o en blanco. Este grupo contenía más del doble de los votos que recibieron los candidatos a la segunda vuelta, Castillo y Fujimori. Sin embargo,

2 <https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker>

en la segunda vuelta, el porcentaje de los que querían expresar su descontento de esta manera se redujo significativamente. Había demasiado en juego. El miedo al “comunismo” o a otro fujimorato era demasiado grande.

Sin embargo, los bandos políticos se reagruparon rápidamente tras la primera vuelta de las elecciones. Cuando Keiko Fujimori se presentó a la segunda vuelta electoral en 2011 y 2016, amplios sectores de la sociedad seguían unidos en una alianza estratégica antifujimorista. Ahora el anticomunismo se ha convertido en el elemento aglutinador de las fuerzas liberal-conservadoras. El escritor de fama internacional Mario Vargas Llosa es un ejemplo de ello. Antes era un crítico acérrimo de Keiko Fujimori, pero ahora ve en ella la posibilidad de “salvar la democracia”. Además, Fujimori recibió el apoyo del tercer y del cuarto clasificados de la primera vuelta electoral: Hernando de Soto, famoso economista neoliberal que lideró la reestructuración económica de los años noventa, y Rafael López Aliaga, simpatizante del Opus Dei y autoproclamado el “Bolsonaro peruano”. Las principales asociaciones empresariales también apoyaron a Fujimori. Los medios de comunicación privados, encabezados por el grupo dominante El Comercio, propiedad de la familia oligárquica Miró-Quesada, lanzaron una campaña de difamación contra Pedro Castillo. Las críticas a la campaña por parte de los observadores internacionales de las elecciones fueron en gran medida desatendidas.

El hecho de que Keiko Fujimori haya podido convertirse en la candidata de todas las fuerzas burguesas, conservadoras y de

derecha es igualmente una expresión de la polarización social y de la desintegración del sistema político. Quiere indultar a su padre, condenado por delitos contra los derechos humanos, y proceder con “mano dura” para “salvar el país”. Pero, sobre todo, en materia de política económica defiende el *business as usual* neoliberal, con una cierta compensación populista, como la ampliación de los comedores sociales.

Por su parte, Castillo, en contra del credo neoliberal, quiere que el Estado participe más en los ingresos de la exportación de materias primas y redistribuya más la riqueza, incluso a costa de acabar con los sistemas privados de educación y sanidad. Un programa de estímulo económico e industrialización de amplia base pretende combatir la pobreza e iniciar el abandono de las exportaciones de productos básicos. Pero, sobre todo, quiere sustituir la Constitución de 1993 y —al igual que en Chile— hacer que una asamblea constituyente la reescriba; no solo con partidos políticos, sino también con organizaciones de base que deben recibir el 60 % de los escaños en la convención. La mayoría de los sindicatos, organizaciones de pequeños agricultores y movimientos sociales apoyan a Castillo, aunque en parte por razones pragmáticas, como en el caso de movimientos feministas.

El partido de Castillo, Perú Libre, se ve a sí mismo en la tradición de Marx, Lenin y Mariátegui, pero no es un partido de cuadros, sino una agrupación más bien suelta y heterogénea. Castillo no tiene antecedentes en el partido y solo fue invitado como candidato presidencial en vísperas de las elecciones, ya

que el líder del partido, Vladimir Cerrón, está imputado en un caso de corrupción. Cerrón escribió el programa electoral y controla el partido. En las próximas semanas se verá cuánta influencia tiene. Durante la campaña electoral, Castillo intentó distanciarse de la retórica radical de Perú Libre. A ello contribuyó la unión con la candidata de izquierda Verónica Mendoza, cuya alianza electoral Juntos por el Perú apela más a la población urbana y logró solo 7 % en la primera vuelta. El equipo técnico de Castillo, un círculo de expertos que estuvo activamente representado en la campaña electoral, también fue reclutado en gran parte de esta unión. Esto hizo que los planes de política económica, en particular, parecieran más serios. El personal de Perú Libre apenas estuvo presente.

Además de la polarización ideológica, los resultados electorales también muestran una fuerte fragmentación regional. Castillo concentra sus bastiones en el altiplano andino, especialmente entre la población indígena y en departamentos (comparables a los estados alemanes) con alta pobreza o fuertes conflictos mineros. En Huancavelica y Puno, en el sur del país, obtuvo más del 80 % de los votos. Fujimori triunfó, como se esperaba, en su centro de poder, la aglomeración urbana de Lima-Callao, y también ganó un puñado de otros departamentos, especialmente en la populosa costa del Pacífico, en el norte del país.

Una de las tareas más urgentes de los próximos años será al menos mitigar las numerosas divisiones (sociales, políticas, regionales). El enfoque de Castillo parece más adecuado

para esto que el de Fujimori. No obstante, incluso bajo la presidencia de Castillo, cabe esperar restricciones o disputas sobre la autodeterminación individual, como demuestran sus declaraciones despectivas sobre el aborto y la homosexualidad. Él y el partido Perú Libre también tienen una inclinación por el autoritarismo. Las cuestiones ecológicas apenas juegan un papel, a diferencia de lo que ocurre con su compañera de alianza Verónica Mendoza. Pero, sobre todo, Castillo rasca el poder y la riqueza de quienes se benefician del *statu quo*.

Keiko Fujimori, por su parte, se niega a ser derrotada y pretende anular 200 000 votos en una demanda sin precedentes en la historia, por considerar que se produjeron irregularidades en 802 mesas de votación. Presentó su demanda con la ayuda de los más renombrados bufetes de abogados del país. Aunque muchos trabajadores electorales ya han refutado las acusaciones, como la falsificación de firmas en videos en línea, el resultado sigue siendo incierto. Los observadores internacionales hablaron de unas elecciones limpias. El factor decisivo será cómo se posicionen otros actores relevantes, entre ellos los militares. Los medios de comunicación social ya les piden que intervengan. Aunque Castillo pueda llegar a la presidencia, Fujimori le negará la legitimidad democrática. En el Congreso de 130 escaños, Perú Libre es la fuerza más poderosa, con 37 escaños. Sin embargo, el bando de Keiko Fujimori, con los apoyos mencionados y otras fuerzas de derecha, llega a más de 80 escaños. Con esta mayoría absoluta, Fujimori también está en una posición cómoda para bloquear proyectos del Gobierno o iniciar un proceso de destitución.

Para Fujimori, no se trata solo de poder político. En marzo, el fiscal general la acusó de corrupción, blanqueo de dinero y participación en el tráfico de drogas. Se enfrenta a hasta 30 años de prisión. La presidencia le daría inmunidad por ahora. Actualmente, millones de personas siguen el llamamiento

de Pedro Castillo para defender la victoria electoral mediante manifestaciones. El reto clave será traducir este potencial de movilización en poder político con raíces institucionales. La asamblea constituyente podría ser un elemento central en este camino.

¿Giro a la izquierda en Perú?

Autor: Axel Anlauf

Publicado por: Fundación Rosa Luxemburg Oficina Región Andina

Miravalle N24-728 y Zaldumbide

Teléfonos: (593-2) 2553771 / 6046945 / 6046946

info.andina@rosalux.org / www.rosalux.org.ec

Quito · Ecuador

Diseño: Freddy Coello

Corrección del texto: María del Pilar Cobo

Foto de la portada: Anthony Niño de Guzmán

Esta publicación es financiada con recursos de la FRL con fondos del BMZ (Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la República Federal de Alemania). Esta publicación o algunas secciones de ella pueden ser utilizadas por otros de manera gratuita, siempre y cuando se proporcione una referencia apropiada de la publicación original.



Esta publicación opera bajo Licencia Creative Commons Atribución No Comercial, sin Modificaciones 3.0. Todos los contenidos pueden ser usados y distribuidos libremente siempre que las fuentes sean citadas.